

Buenos Aires, 3 de mayo de 2007

Vistos los autos: "El Cóndor Empresa de Transportes S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa".

Resulta:

I) Que a fs. 29/37, El Cóndor Empresa de Transportes S.A. —quien invoca su condición de permissionaria para la prestación del servicio público de transporte interjurisdiccional de pasajeros y afines, otorgada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación conforme a la ley nacional 12.346— promueve la presente acción declarativa, en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del impuesto a los ingresos brutos que ese Estado local pretende aplicarle por la actividad que desarrolla, con fundamento en el Código Tributario de esa jurisdicción.

Relata que la acción intentada tiene su origen en el reclamo que le ha formulado la Dirección General de Rentas provincial para que abone el referido tributo, respecto de períodos fiscales ya vencidos (v. resolución 215/98 a fs. 13/26), tal como se desprende del acta de verificación que en fotocopia se acompaña (v. fs. 27).

Cuestiona la existencia y alcances de las atribuciones que se ha arrogado el Estado local demandado, al ejercer su pretensión fiscal pues, si bien es admisible —según dice— que las provincias regulen ciertos aspectos del tránsito de mercaderías, no puede aceptarse que afecten el transporte interjurisdiccional al punto de desnaturalizar su ejercicio, conculcar el derecho de propiedad y la libertad de tránsito o comercio, e invadir esferas propias del Gobierno Federal, en abierta violación a los arts. 17, 31 y 75, inc. 13 de la Constitución Nacional.

Aduce que las tarifas vigentes en el transporte interjurisdiccional que presta fueron fijadas, desde su origen, por la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación, organismo que no contempló la incidencia que sobre ellas tendría la aplicación del impuesto provincial a los ingresos brutos que aquí se impugna.

Afirma que de aceptarse el criterio que postula la autoridad fiscal provincial, el referido gravamen ha de ser soportado exclusivamente por las permisionarias, con la consecuente disminución de la rentabilidad a la explotación del transporte interjurisdiccional, lo cual no sólo ocasiona un perjuicio a su patrimonio —lo que motiva su interés particular en el pleito—, sino también al servicio público.

Observa, asimismo que, dado que debe tributar el impuesto a las ganancias por la actividad que despliega (v. leyes nacionales 20.628 y 22.016 y sus modificatorias) la determinación a su respecto del gravamen local cuestionado configura una hipótesis de doble imposición vedada por el art. 9º, inc. b, párrafo 2º, de la ley 20.221 que aprueba el Régimen de Coparticipación Federal, cuyo principio básico, privilegiado por el legislador, es la imposibilidad de mantener o establecer impuestos locales sobre la materia imponible sujeta a imposición nacional coparticipable (t.o. según la ley 22.006).

Por todo ello pide que se declare la improcedencia de la pretensión fiscal de la demandada.

II) A fs. 62, el Tribunal imprime al presente juicio el trámite del proceso ordinario con arreglo al art. 319 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (texto según la ley 25.488).

III) A fs. 81/83, la Provincia de Buenos Aires,

contesta la demanda y solicita su rechazo.

En primer lugar, niega la existencia de un estado de incertidumbre toda vez que lo que se cuestiona en autos es un acto de imperio, tendiente a lograr la percepción del tributo sobre la base de facultades constitucionales reconocidas a la provincia. Destaca, asimismo, que el procedimiento de pago y posterior repetición previsto en el Código Fiscal provincial resulta el medio específico para debatir el tema, lo que excluye la vía del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En cuanto al fondo del asunto, observa que la cuestión consiste en definir si la decisión de las provincias de gravar con un impuesto local el transporte interjurisdiccional violenta el art. 75, inc. 13 de la Constitución Nacional. Sostiene la validez de los tributos provinciales que gravan manifestaciones del comercio interjurisdiccional en la medida en que no se constituyan en una traba para ese comercio, la circulación o el consumo, no resulten discriminatorios ni provoquen una superposición impositiva.

Arguye, en tal sentido, que el Convenio Multilateral es el instrumento que los fiscos han suscripto a fin de armonizar y coordinar aspectos referentes al impuesto sobre los ingresos brutos, para evitar imposiciones múltiples (v. art. 9° y ley provincial 8960/77).

Indica, asimismo, que durante 10 años la actora se sometió a la potestad tributaria provincial, razón por la cual su presentación resulta extemporánea a la luz de la doctrina de los propios actos.

Señala que, el 27 de septiembre de 2000, las Cámaras Empresarias de Autotransporte de Cargas y Pasajeros, a las que pertenece la demandante, celebraron con la Provincia de Buenos Aires un acuerdo por medio del cual se comprometieron a la

estricta observancia de las obligaciones tributarias provinciales, en tanto que el Estado local redujo la alícuota sobre los ingresos brutos para la actividad de 3,5% al 1,5%.

Concluye en que si la empresa actora, por sí y por medio de las instituciones representativas del sector, aceptó sin cuestionamientos la aplicación del tributo y se benefició con la reducción de alícuotas, todo ello —a su entender— ratifica la improcedencia de la acción impetrada.

IV) A fs. 47/52, el Tribunal se declara competente para conocer el caso en su instancia originaria, de conformidad a lo dictaminado a su respecto por el señor Procurador General de la Nación, a fs. 38/43.

V) A fs. 173/174, luce el dictamen del señor Procurador General acerca de las cuestiones constitucionales comprometidas.

Considerando:

1º) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

2º) Que corresponde señalar que la pretensión de la actora tiene como objeto dilucidar el estado de falta de certeza en que se encuentra frente al reclamo provincial de gravar con el impuesto sobre los ingresos brutos la actividad de transporte interjurisdiccional que desarrolla.

3º) Que la resolución 215/98, por la que se inicia el procedimiento determinativo y sumarial y se procede a la determinación del monto imponible, tomada en el expediente administrativo 2306-352.792/97 (v. fs. 13/27) —requerimiento al que la actora atribuye ilegitimidad y lesión al régimen federal— representa una conducta explícita de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Buenos Aires dirigida a la percepción del impuesto que estima adeudado. Por lo que

cabe concluir que la actora tiene un interés sustancial y concreto que busca precaver los efectos de un acto en ciernes y que constituye un caso contencioso en los términos del art. 2° de la ley 27 y del art. 116 de la Ley Fundamental (Fallos: 308:2569; 310:606 y 977; 311:421, entre otros).

4°) Que, sentado ello, corresponde indicar que las cuestiones sometidas a decisión de esta Corte son sustancialmente análogas a las que han sido examinadas y resueltas en la causa "Transportes Automotores La Estrella S.A. c/ Río Negro, Provincia de s/ acción declarativa" (Fallos: 328:4198), a cuyos fundamentos y conclusiones cabe remitir en razón de brevedad.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal subrogante, se decide: Hacer lugar a la demanda promovida por El Cóndor Empresa de Transportes S.A. contra la Provincia de Buenos Aires y declarar la improcedencia de la pretensión fiscal de la demandada. Con costas (art. 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, remítase copia de esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NO-LASCO - CARLOS S. FAYT (en disidencia)- ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

DISI-//-



-//-DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT

Considerando:

Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

Que es de aplicación la doctrina expuesta en Fallos: 321:2517 ("El Libertador S.A.C.I."), voto de los jueces Fayt, Levene y Boggiano, en los cuales los planteos de las partes guardan sustancial analogía con lo aquí debatido (v. voto del juez Fayt, causa "Transportes Automotores La Estrella S.A.", Fallos: 328:4198).

Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal subrogante, se decide: Rechazar la demanda. Costas por su orden en atención a la existencia de precedentes que pudieron inducir a la actora a creerse con derecho a demandar (art. 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, archívese. CARLOS S. FAYT.

ES COPIA

Nombre del actor: **El Cóndor Empresa de Transportes S.A.**

Nombre del demandado: **Buenos Aires, Provincia de**

Profesionales intervinientes: **Dr. Gustavo Adolfo Blanco y Alejandro Fernández Llanos.**